



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

JAIME ALMENAR BELENGUER, Secretario del Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, en uso de las competencias que le otorga el artículo 40 del Reglamento de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, aprobado por Real Decreto 1994/1996, de 6 de septiembre,

### CERTIFICA

Que en la Sesión num. 25/06 del Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones celebrada el día 16 de julio de 2006, se ha adoptado el siguiente

### ACUERDO

Por el que se aprueba la:

**RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DENIEGA LA PETICIÓN DE SUSPENSIÓN SOLICITADA POR LA ENTIDAD TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. EN EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 11 DE MAYO DE 2006, RELATIVA A LA SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE NUMERACIÓN PARA EL SERVICIO DE RED PRIVADA VIRTUAL DE TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. (DT 2005/1248).**

En relación con la solicitud de suspensión incorporada al recurso de reposición interpuesto por TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. contra la Resolución de esta Comisión, de fecha 11 mayo de 2006, relativa a la solicitud de asignación de numeración para el servicio de red privada virtual de TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. (en adelante, TESAU) (DT 2005/1248), el Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones ha adoptado, en su sesión núm. 25/06 del día de la fecha, la siguiente Resolución:

Resolución de 16 de julio de 2006, recaída en el expediente AJ 2006/883.

### HECHOS

**PRIMERO.-** Con fecha 11 de mayo de 2006, el Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones dictó Resolución relativa a la solicitud de asignación de numeración para el servicio de red privada virtual de TESAU (DT 2005/1248).



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

A través del Resuelve de la citada Resolución, esta Comisión decidió lo siguiente:

**“Primero.** No asignar a Telefónica los rangos de numeración 900-0 solicitados.

**Segundo.** Asignar a Telefónica los bloques de numeración identificados por los códigos NXYABM del plan nacional de numeración telefónica para la prestación del servicio de cobro revertido automático.

NXY	AB	M
900	88	0-9

**Tercero.** Telefónica deberá comunicar a las entidades autorizadas para prestar los servicios telefónicos disponible al público, fijo o móvil, la fecha a partir de la cual deberán disponer sus redes para permitir el encaminamiento de llamadas para dicha numeración asignada. Esta notificación se realizará en todo caso con una antelación mínima de dos meses a dicha fecha efectiva de apertura en interconexión de la numeración asignada.

**Cuarto.** Cancelar la asignación a Auna de los bloques de numeración que se citan a continuación identificados por los dígitos NXYABM del Plan nacional de numeración telefónica, de tal modo que queden liberados y disponibles para su posterior asignación desde la notificación de la presente Resolución.

NXY	AB	M
900	01	0-9
900	02	0
		1
		3
		4
		5
		6
		7
		8
		9
900	05	0-9

**Quinto.** Modificar el Registro público de numeración, de conformidad con las asignaciones y cancelaciones de numeración efectuadas.

**Sexto.** Que Telefónica no podrá seguir utilizando numeración atribuida al servicio de cobro revertido automático, ni a ningún otro servicio de comunicaciones electrónicas disponible al público, para el



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

*encaminamiento en su red de llamadas del servicio de red privada virtual, a partir de los seis meses siguientes a la notificación de la presente resolución”.*

**SEGUNDO.-** Con fecha 21 de junio de 2006, ha tenido entrada en el Registro de esta Comisión escrito presentado por el representante de TESAU, en virtud del cual interpone recurso de reposición contra la citada Resolución de fecha 11 mayo de 2006.

La entidad recurrente muestra su disconformidad con la Resolución impugnada solicitando la nulidad de pleno derecho, o subsidiariamente la anulabilidad de de la misma, conforme determinan los artículos 62.1 y 63 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJPAC),

En concreto, TESAU fundamenta su recurso en los siguientes aspectos:

- Que el 29 de noviembre de 2005, esta Comisión remitió a TESAU el informe elaborado por los servicios correspondientes, sobre la base del cual, TESAU presentó alegaciones a esta Comisión en fecha 13 de diciembre de 2005.

La resolución definitiva adoptada por el Consejo resuelve en un sentido distinto al del informe de referencia.

TESAU considera que al haberse producido un cambio de criterio respecto al informe de los servicios al que TESAU presentó alegaciones, esta Comisión debería haber remitido una propuesta de resolución a los interesados ofreciendo trámite de audiencia para presentar alegaciones.

Asimismo, establece que esta Comisión debería haber motivado el cambio de criterio, en base al artículo 54 de la LRJPAC, que señala que los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos y los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos deben ser motivados.

- Que el acuerdo de avocación adoptado por el Consejo adolece de nulidad por resultar contrario al artículo 14.2 de la LRJPAC, ya que no se ha notificado el acuerdo de avocación a los interesados a lo largo del procedimiento, y además no se ha motivado suficientemente.
- Que la resolución objeto del recurso procede a exigir a TESAU un abandono de numeración sin ofrecer una solución viable desde el punto de vista regulatorio, además de que reincide en la situación de provisionalidad que se ha mantenido hasta ahora con la numeración del servicio de red privada virtual.



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Asimismo, la Comisión ha reiterado, en la resolución recurrida, la ausencia de numeración atribuida al servicio de RPV y la inadecuación del código 9000 para este uso por tratarse de un rango atribuido al servicio de cobro revertido automático. Por lo tanto, no parece conveniente el apresuramiento en que incurre la resolución recurrida a la hora de imponer la liberación del rango 9000 por TESAU, pareciendo más recomendable la espera a la definición pendiente según el artículo 34 del Real Decreto 2296/2004, de de 10 de diciembre.

- Que el plazo de 6 meses que se fija en la resolución recurrida, para que TESAU deje de utilizar la numeración atribuida al servicio de cobro revertido automático es insuficiente, ya que las dificultades radican, no sólo en los cambios a realizar en la red propia, sino, especialmente, en las modificaciones a realizar en las instalaciones del cliente, debido a las reprogramaciones a que obliga la nueva numeración.
- TESAU muestra su rechazo al mantenimiento por esta Comisión del bloque 900022, asignado a AUNA TELECOMUNICACIONES, S.A.U., decisión que le causa perjuicios a ella y sus clientes. Decisión además que no ha sido puesta en conocimiento a TESAU en trámite de audiencia previo.

Asimismo, TESAU solicita a través del otrosí digo, la suspensión de la citada Resolución impugnada en virtud de lo dispuesto en el artículo 111.2 apartados a) y b) de la LRJPAC, esto es, que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación, y por fundamentarse la impugnación en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en el artículo 62.1 de la LRJPAC,

A los anteriores antecedentes de hecho les son de aplicación los siguientes

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

### I. FUNDAMENTOS JURÍDICOS PROCEDIMENTALES.

#### PRIMERO.- Admisión a trámite.

En el escrito presentado por TESAU interponiendo recurso de reposición contra la Resolución de fecha 11 de mayo 2006, viene a solicitar en el otrosí digo la suspensión de la ejecución de la citada Resolución impugnada.



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

El artículo 111 de la LRJPAC regula la suspensión de la ejecución de los actos administrativos, cuando éstos han sido objeto de cualquier recurso administrativo.

Habida cuenta que el recurso de reposición presentado por la entidad TESAU, en el que se solicita la suspensión del acuerdo impugnado, se interpone contra una Resolución de esta Comisión, que resulta susceptible de recurso según lo dispuesto por los artículos 107 y 116 de la LRJPAC, y dentro del plazo previsto por el artículo 117 de la citada Ley, procede admitir a trámite la referida petición de suspensión para su resolución final.

### **SEGUNDO.- Competencia para resolver.**

Corresponde al Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones la competencia para resolver el mencionado recurso de reposición y, por tanto, la petición de suspensión en él contenido, por ser el órgano administrativo que dictó el acto impugnado.

## **II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS MATERIALES.**

### **Primero.- Sobre la petición de suspensión de la Resolución recurrida.**

Conforme a lo expuesto en los antecedentes de hecho, la entidad TESAU solicita expresamente la suspensión de la ejecución de la Resolución por ella impugnada. En particular, interesa a TESAU la suspensión de la ejecución de la obligación impuesta en el resuelve Sexto, el cual establece lo siguiente:

*“Que Telefónica no podrá seguir utilizando numeración atribuida al servicio de cobro revertido automático, ni a ningún otro servicio de comunicaciones electrónicas disponible al público, para el encaminamiento en su red de llamadas del servicio de red privada virtual, a partir de los seis meses siguientes a la notificación de la presente resolución”.*

Según lo establecido en el artículo 111.1 de la LRJPAC, la interposición de cualquier recurso no suspenderá la ejecución del acto impugnado.

No obstante, el órgano a quien competa resolver el recurso podrá, en virtud del artículo 111.2 de la LRJPAC, suspender la ejecución del acto impugnado, previa ponderación entre el perjuicio que causaría al interés público o a terceros la suspensión y el perjuicio que se causa al recurrente como consecuencia de la eficacia inmediata del acto recurrido. Para ello, se señalan en el citado artículo dos circunstancias alternativas que deben concurrir para que sea posible la suspensión:

- Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

- Que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en el artículo 62.1 de la LRJPAC.

Por consiguiente, en aplicación del artículo citado, para determinar si procede o no acceder a la suspensión solicitada por la recurrente, esta Comisión ha de analizar, en primer lugar, si concurre alguna de las circunstancias señaladas en las letras a) y b) del artículo 111.2 de la LRJPAC. En el caso de que se compruebe la concurrencia de alguna de ellas, deberá analizarse, en segundo lugar, si debe prevalecer el interés público o de terceros, o el del interesado en la suspensión del acto, previa ponderación razonada de los perjuicios que a unos y otros causaría la suspensión o la ejecución inmediata del acto recurrido.

Asimismo, cabe recordar que la eficacia del acto administrativo sometido a debate se tendrá que valorar desde la perspectiva del interés general, puesto que según la jurisprudencia dictada al efecto esta valoración constituye un presupuesto más para la adopción de una medida como la ahora solicitada, por formar parte este interés general del núcleo esencial en la aplicación del derecho administrativo en su conjunto.

Pues bien, ha de señalarse que TESAU ha invocado, por un lado, la nulidad de pleno de derecho de la Resolución recurrida por concurrir alguno de los motivos previstos en el artículo 62.1. de la LRJPAC, y además, ha solicitado la suspensión de la ejecución de la resolución impugnada, en base al artículo 111.2 de la LRJPAC.

Por las razones que seguidamente se exponen, esta Comisión considera que, en el presente caso no concurren las circunstancias necesarias que determinarían la suspensión de la Resolución recurrida al amparo de lo dispuesto en el artículo 111 de la LRJPAC.

### **Segundo.- Sobre las causas de nulidad alegadas para impugnar la Resolución.**

Con carácter previo, la recurrente solicita la suspensión de la Resolución recurrida teniendo en cuenta la causa de nulidad en la que se basa su impugnación desarrollada a lo largo de su escrito. En concreto, y con base en el artículo 62.1.f de la LRJPAC, se denuncia la nulidad de pleno derecho de la Resolución impugnada.

Cabe recordar, en primer lugar, que, para apreciar si el pretendido vicio determinante de la nulidad resulta patente y notorio, tal y como exige la consolidada doctrina jurisprudencial para otorgar la suspensión por causa de nulidad, será preciso el análisis del contenido del motivo de impugnación con abstracción del fondo del asunto.

En este sentido se expresa la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en su Sentencia de 23 de marzo de 2001 (RJ 2001\3004) al indicar que:





## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

*“No resulta suficiente por último, en contra de lo que se alega, la simple invocación de la existencia de un vicio de nulidad de pleno Derecho de los acuerdos impugnados para que proceda acordar su suspensión cautelar. Esta Sala tiene declarado que la apariencia de buen Derecho sólo puede admitirse en casos en los que la pretensión del recurrente aparezca justificada en forma manifiesta, sin necesidad de un análisis detenido de la legalidad, que está reservado necesariamente al proceso principal.”*

Además, en el momento de analizar la causa de nulidad alegada por la recurrente debe tenerse en cuenta el criterio de interpretación restrictiva para la apreciación de dicha causa establecido por la jurisprudencia y expuesto, entre otras muchas, en Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 11 de noviembre de 2003 (RJ 2004/402), en cuyo fundamento de Derecho octavo señala lo siguiente:

*“La jurisprudencia, al considerar el aspecto positivo o habilitante del fumus boni iuris, advierte frente a los riesgos de perjuicio (Dogma vom Vorwegnahmeverbot en la doctrina alemana), declarando que «la doctrina de la apariencia de buen derecho, tan difundida, cuan necesitada de prudente aplicación, debe ser tenida en cuenta al solicitarse la nulidad de un acto dictado en cumplimiento o ejecución de una norma o disposición general, declarada previamente nula de pleno derecho o bien cuando se impugna un acto idéntico a otro que ya fue anulado jurisdiccionalmente, pero no [...] al predicarse la nulidad de un acto, en virtud de causas que han de ser, por primera vez, objeto de valoración y decisión en el proceso principal, pues, de lo contrario se prejuzgaría la cuestión de fondo, de manera que por amparar el derecho a una efectiva tutela judicial, se vulneraría otro derecho, también fundamental y recogido en el propio artículo 24 de la Constitución (RCL 1978\2836), cual es el derecho al proceso con las garantías debidas de contradicción y prueba, porque el incidente de suspensión no es trámite idóneo para decidir la cuestión objeto del pleito» (autos de 22 de noviembre de 1993 [RJ 1993\8943] y 7 de noviembre de 1995 [RJ 1995\8137] y sentencia de 14 de enero de 1997 [RJ 1997\131], entre otras muchas resoluciones).*

Pues bien, por lo que se refiere a los motivos alegados por TESAU para fundamentar la nulidad de pleno derecho de la Resolución impugnada, a saber, i) haberse resolución del procedimiento en sentido distinto al del informe de los servicios de esta Comisión, sin haber podido presentar alegaciones la parte recurrente, ii) la falta de motivación respecto al cambio de criterio en relación al informe de los servicios, y iii) la falta de motivación de la avocación y su improcedente notificación en la resolución del procedimiento, es preciso señalar que la concurrencia en el presente caso de los vicios invocados no resulta manifiesta o inequívoca, pues se requiriere el análisis de fondo de dicha cuestión a los efectos de determinar si efectivamente tuvo lugar la vulneración de dichos derechos en el procedimiento, y si ello conllevaría la nulidad de la Resolución posterior dictada por la Comisión.



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

En este mismo sentido se ha pronunciado el Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo) en Sentencia de 18 de mayo de 2004 (RJ 2004/4409) señalando:

*“...que es también doctrina reiterada del Tribunal Supremo, la que precisa que la pieza de suspensión o el incidente de medidas cautelares no es el cauce o momento procesal oportuno para resolver la cuestión de fondo, ni por tanto para hacer valoraciones que sean propias del fondo del asunto, pues ello sería tanto como desvirtuar su propia naturaleza y contenido, y el resolver la cuestión de fondo sin trámite de demanda, de prueba y de conclusiones, esto es, sin las garantías y trámites que al efecto ha establecido el Legislador”.*

Teniendo en cuenta todo lo anterior, y haciendo abstracción del análisis detenido de la legalidad del acto impugnado, reservado al procedimiento principal que se hará en la resolución del presente recurso, al analizar el contenido de los motivos de nulidad señalados, resulta que la presunta vulneración de los derechos constitucionales alegados de contrario no se deduce a primera vista ni de manera evidente o manifiesta.

No obstante lo anterior, y sin perjuicio del análisis de las pretensiones que esta Comisión realizará en el procedimiento principal, se hace necesario resolver determinados aspectos, alegados por TESAU en su escrito de recurso, que ponen de manifiesto la improcedencia de suspender la ejecución de la resolución dictada por esta Comisión en fecha 11 de mayo de 2006.

a) Sobre la resolución del procedimiento en sentido distinto al del informe de los servicios de esta Comisión, sin haber podido presentar alegaciones la parte recurrente.

Con respecto al primero de los motivos alegados por TESAU, la entidad declara en su escrito de recurso que *“presentó alegaciones en el expediente administrativo a los informes de la CMT en los que se recoge una propuesta concreta al Consejo, resultando que posteriormente y dar trámite de audiencia para presentar nuevas alegaciones se dicta por la CMT una Resolución absolutamente diferente, a cuyo contenido mi representada no ha podido presentar alegaciones por no haberse dado trámite de audiencia”*

Debe recordarse que el Consejo es el órgano decisorio de las resoluciones que emite la Comisión en relación con el mercado de las telecomunicaciones, y no sus Servicios.

El informe de los Servicios constituye un trámite de puesta en conocimiento de los interesados del criterio provisional de los Servicios sobre el objeto del expediente, que ni tiene porqué ser el criterio definitivo de los Servicios, pues





## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

las alegaciones a dicho trámite pueden cambiar el criterio comunicado, ni en última instancia constituyen el criterio final de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, que se expresa mediante decisión del Consejo, y mediante la correspondiente resolución.

Huelga decir que el Consejo es autónomo en su decisión sobre el sentido de la resolución, sin que deba proceder a dar cuenta del cambio de criterio al interesado antes de la resolución, salvo que se vayan a tener en cuenta hechos o alegaciones distintas de las incorporadas al expediente, y sobre las que el interesado ya ha podido presentar sus correspondientes alegaciones previas al trámite de audiencia.

El trámite del informe de los servicios constituye una referencia para los interesados, en tanto expresa un criterio aproximativo de los servicios, pero ni es un trámite preceptivo (perfectamente se podría dar trámite de alegaciones al interesado con puesta de manifiesto del expediente, sin pronunciamiento inicial de los servicios, como literalmente prevé el art. 84 de la Ley 30/1992) ni por supuesto vincula al Consejo de la Comisión, único órgano legitimado –sin perjuicio de las delegaciones existentes- para decidir en nombre de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones los asuntos de su competencia regulatoria.

Tampoco resulta necesaria la motivación del cambio de criterio respecto del expresado en el informe de los servicios, puesto que conviene recordar que no es éste ninguno de los supuestos previstos en el art. 54 de la Ley 30/1992 en los que se exija necesariamente la motivación del acto. Concretamente, y considerando especialmente el apartado d) art. 54, que requiere la motivación del acto cuando se aparte del dictamen de órganos consultivos, ni los servicios son un órgano consultivo, ni el informe es un dictamen al uso, a pesar del nombre que tradicionalmente se ha venido empleando para designarlos, puesto que el dictamen es un acto de instrucción emitido por un tercero distinto al instructor para contribuir a definir la propuesta que se vaya a elevar, mientras que el informe de los servicios constituye, como se ha dicho, un avance del criterio inicial del mismo instructor, sometido a la audiencia a los interesados.

Por ello, no se aprecia en esta fase la causa de nulidad manifestada por el interesado, siendo improcedente la suspensión por dicho motivo.

Además, aún en el caso hipotético de que en la resolución que se dictara se estimara la vulneración de dicho derecho, ello no constituiría causa alguna de nulidad, sino de anulabilidad, conforme al artículo 63.3 de dicha Ley, por lo que no se daría el supuesto del artículo 111.2.b.

En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo) en Sentencia de 11 de julio de 2003 (RJ 2003/5433), al establecer que:



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

*“...la falta de cumplimiento del trámite de audiencia en un procedimiento no sancionador no es, por si propia, causa de nulidad de pleno derecho, sino que solo puede conducir a la anulación del acto en aquellos casos en los que tal omisión haya producido la indefensión material y efectiva del afectado por la actuación administrativa.*

*Así, ninguna de las causas de nulidad contempladas en el artículo 62 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, resulta aplicable a la simple falta de trámite de audiencia. No lo es la prevista en la letra a), según la cual son nulos de pleno derecho aquellos actos que lesionen el contenido esencial de los derechos susceptibles de amparo constitucional, porque el derecho a la defensa sólo constituye un derecho susceptible de dicho remedio constitucional en el marco de un procedimiento sancionador...; fuera de ese ámbito sancionador, la falta del trámite de audiencia en el procedimiento administrativo e incluso la misma indefensión, si se produce, podrán originar las consecuencias que el ordenamiento jurídico prevea, pero no afectan a un derecho fundamental o libertad pública susceptible de amparo constitucional.*

*...Asimismo, el afectado puede contar con la ocasión de ejercer la defensa de sus intereses cuando existe un recurso administrativo posterior y en último término, esta posibilidad de plena alegación de hechos y de razones jurídicas y consiguiente evitación de la indefensión se puede dar ya ante la jurisdicción Contencioso-Administrativa”.*

### b) Sobre la falta de motivación de la avocación y su improcedente notificación en la resolución del procedimiento.

En cuanto a la segunda de las cuestiones planteadas por la entidad recurrente, esto es la nulidad de pleno derecho, por considerar que el acuerdo de avocación adoptado por el Consejo de esta Comisión es contrario al artículo 14.2 de la LRJPAC, debemos poner de manifiesto, que si bien es cierto que el citado artículo establece que *“la avocación se realizará mediante acuerdo motivado que deberá ser notificado a los interesados en el procedimiento, con anterioridad a la resolución final que se dicte”*, la falta de motivación y la notificación efectuada en la resolución que pone fin al procedimiento, no son causas de nulidad de pleno derecho.

Lo anterior, se apoya en la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, sirviendo de ejemplo la Sentencia de 26 de mayo de 2000 (RJ 2000/4801), que en relación a la falta de motivación de los actos administrativos, establece lo siguiente:

*“De cualquier modo, la falta de motivación o la motivación defectuosa no constituye nunca un supuesto de nulidad de pleno derecho que el art. 62 de la Ley 30/1992 reserva para los supuestos que enumera, entre los que no aparece incluido éste. A lo más, puede ser un vicio de anulabilidad, de*



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

*acuerdo con el art. 63.2 de la citada Ley, o implicar simplemente una mera irregularidad no invalidante. Ello dependerá de que haya producido o no indefensión al administrado. Y a tal efecto, el requisito de motivación puede considerarse cumplido, si responde a la doble finalidad de dar a conocer al destinatario las razones de la decisión que se adopta y permitir su eventual control jurisdiccional mediante el efectivo ejercicio de los derechos (Sentencias del Tribunal Constitucional 79/1990 [RTC 1990\79], 199/1991, de 28 octubre [RTC 1991\199] y del Tribunal Supremo de 18-4 y 1-10-1988 [RJ 1988\3122 y RJ 1988\7413], 3-4-1990 [RJ 1990\3575], 4-6-1991 [RJ 1991\4861], 23-2-1995 [RJ 1995\1665], 12-1 y 11-12-1998 [RJ 1998\594 y RJ 1998\10261] entre muchas otras)”.*

Por otro lado, si bien es cierto que la notificación a los interesados se produjo en la resolución que pone fin al procedimiento, y ello no se ajusta a lo establecido en la LRJPAC, dicho defecto no produciría la nulidad del acto, sino una mera irregularidad no invalidante, que ninguna indefensión ha generado al interesado.

Por su parte, la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Contencioso-administrativo), de 10 de febrero de 1998 (RJ 1998/2200), manifiesta en sus fundamentos de derecho lo siguiente:

*“no puede elevarse a rito lo que no es más que un requisito formal de garantía no determinante de nulidad, cuando se trata de una omisión intrascendente, en cuanto la realidad acredita el conocimiento por el destinatario del contenido del acto y de todas las exigencias para su impugnación desde el momento de la notificación”.*

### **Tercero.- Sobre los perjuicios que se ocasionan con la ejecución de la Resolución recurrida.**

TESAU, manifiesta en su escrito de recurso, al solicitar la suspensión lo siguiente:

*“Una nueva numeración para la prestación del servicio originaría tanto para Telefónica de España como para sus clientes una serie de graves perjuicios de índole económica y de gestión de negocio, que se señalan en el informe “Impacto de una cambio de numeración en el servicio RPV”, al que se hace referencia en la nota 2 y que obra en el expediente administrativo al haber sido aportado por Telefónica de España en su escrito de 10 de octubre de 2006”.*

A este respecto cabe señalar, entre otras, lo manifestado por la Sección 4ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en su Auto de 3 de junio de 1997 (RJ 1997/5049):



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

*“la mera alegación, sin prueba alguna, no permite estimar como probado, que la ejecución del acto impugnado (o la vigencia de la disposición impugnada) le pueda ocasionar perjuicios, ni menos que éstos sean de difícil o imposible reparación”.*

De igual modo, en su Auto de 26 de marzo de 1998 (RJ 1998\3216), señalaba ese Tribunal que:

*"No basta, por otra parte, que la petición de suspensión vaya acompañada de una expresa manifestación de los perjuicios irreparables que pudieran irrogarse al recurrente caso de no acordarse, siendo necesario según reiterada doctrina de esta Sala que se aporte al menos un principio de prueba de la sobreveniencia de tales perjuicios, o bien que la existencia de los mismos pueda deducirse de la naturaleza del acto impugnado, caso de no accederse a ella. Por otra parte, resulta absolutamente necesario que tales circunstancias sean patentes en el momento de la solicitud de suspensión."*

De esta manera no se manifiestan con claridad en el escrito de recurso, los hipotéticos perjuicios que pudieren causarle a TESAU la ejecución de la Resolución impugnada, ni pueden deducirse de la Resolución recurrida. Es especialmente relevante destacar que TESAU dispone de un plazo de seis meses desde la resolución impugnada, tiempo suficiente, a juicio de la Comisión, para proceder a su cumplimiento. Por lo tanto, tampoco concurre en el presente caso la circunstancia establecida en el apartado a) del artículo 111.2 de la LRJPAC para que se pueda acceder a la petición de suspensión.

A mayor abundamiento, es preciso señalar que, en el presente supuesto, además de no concurrir ninguna de las circunstancias previstas en las letras a) y b) del artículo 111.2 de la LRJPAC, la ponderación de perjuicios exigible para proceder a la suspensión determina que serían mayores los perjuicios ocasionados al interés público por la suspensión de la ejecución de la Resolución impugnada que los originados a la propia recurrente por la ejecución inmediata de ésta. El interés del recurrente en defender cautelarmente una situación de hecho como la existente, en la que se está utilizando una numeración por TESAU al margen de las prescripciones del Plan de Numeración, y sin la preceptiva asignación de la numeración por la Comisión, no se justifica a la vista de los intereses públicos afectados.

En virtud de lo anterior no procede acceder a la solicitud de suspensión planteada por TESAU en el recurso de reposición del que trae causa, por lo que la Resolución dictada por esta Comisión en fecha 11 de mayo de 2006 (DT 2005/1248), objeto del presente recurso, es plenamente eficaz desde su notificación a los interesados.

En atención a todo lo anterior, y vistos los citados antecedentes y fundamentos jurídicos, esta Comisión



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

### RESUELVE

**ÚNICO.-** Desestimar la solicitud de suspensión de la eficacia inmediata de la Resolución de esta Comisión, de 11 de mayo de 2006, relativa a la solicitud de asignación de numeración para el servicio de red privada virtual de TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. (DT 2005/1248)..

El presente certificado se expide al amparo de lo previsto en el artículo 27.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y el artículo 23.2 de la Orden de 9 de abril de 1997, por la que se aprueba el Reglamento de Régimen Interior de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, con anterioridad a la aprobación del Acta de la sesión correspondiente.

Asimismo, se pone de manifiesto que contra la Resolución a la que se refiere el presente certificado puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 48.17 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, la Disposición Adicional Cuarta, apartado 5, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de lo previsto en el número 2 del artículo 58 de la misma Ley.

EL SECRETARIO

Vº Bº

EL PRESIDENTE

Jaime Almenar Belenguer

Reinaldo Rodríguez Illera